

La clase en la calle: los docentes argentinos y la lucha por la defensa del salario

CANDELARIA M. LUQUE

correo: canduli2004@hotmail.com

Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos UNAM

A partir de febrero de 2017, el gobierno argentino mantiene una postura intransigente con los docentes de su país, negándose a convocar a la Paritaria Nacional Docente (PND); instrumento legal que regula el salario a través de la negociación entre el Estado nacional, las provincias y los principales gremios docentes nacionales. La PND está establecida en la Ley de Financiamiento Educativo del 2006 y es una de las mayores reivindicaciones de la lucha docente.

Los argumentos esgrimidos por el gobierno son múltiples. En primer lugar, en el acuerdo salarial celebrado en 2016 se establece que el salario docente deberá ser al menos 20% más alto que el salario mínimo y que este monto se debe actualizar automáticamente *sin perjuicio* de lo que se acuerde en la PND. Desde el punto de vista gubernamental, esto invalidaría la PND; no obstante, los docentes rechazan este hecho y argumentan que, en la práctica, ese porcentaje resulta insuficiente dentro del contexto de la creciente inflación que ha vivido Argentina en los últimos años.

Por otro lado, el gobierno considera que el Estado nacional no debe intervenir en la discusión de un sueldo que no paga y la paritaria debe realizarse en cada provincia de acuerdo a sus propios recursos. La mayoría de las jurisdicciones –independientemente del signo político que las gobierne– avalaron esta decisión bajo el argumento de no contar con los ingresos suficientes para solventar un aumento negociado a nivel nacional, sobre todo ante el rumor de que los fondos que envía el gobierno nacional para los incrementos salariales (los recursos coparticipables y el Programa Nacional de Compensación Salarial

Docente) iban a eliminarse. Así, los gobernadores acordaron adoptar un aumento del 18% como tope, que fue el porcentaje negociado por la Provincia de Buenos Aires con sus trabajadores estatales.

El carácter estratégico de la PND se define por ser la instancia de referencia en muchas de las negociaciones del resto de los sectores públicos (fuerzas de seguridad, salud, administraciones estatales, entre otros) para los cuales el gobierno nacional no envía fondos de asistencia. Esto explica tanto el rechazo de las provincias como la adhesión masiva de múltiples sectores de trabajadores al reclamo docente.

Este ataque deliberado al nivel de vida y legitimidad social de los maestros desencadenó un enfrentamiento entre el gobierno nacional, las provincias y los gremios docentes, que se inició en las semanas previas al comienzo de clases y que en el caso de la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santa Cruz se ha mantenido de forma sostenida por muchos meses. Debido a su magnitud y relativa unidad de objetivos y modos de acción, el conflicto adoptó la forma de un movimiento social que congregó –como no sucedía desde hace varios años– a los más diversos sectores docentes de todo el país. La Carpa Blanca de la Dignidad¹ del año 1997, junto con otras experiencias de lucha que los maestros argentinos libraron a fines del siglo XX, se han convertido en referentes dentro de la memoria del movimiento en torno a la defensa de la educación pública.

Tuvimos desde los inicios una educación precaria que fue avanzando su presupuesto debido a luchas sociales. Pero la educación en sí no es el problema. El conflicto político es la otra pata: qué país queremos construir para el desarrollo educativo es el “DNI” de nuestra historia (Emilio Luque, docente jubilado)

La premisa inicial del movimiento fue el reclamo por un salario digno y paulatinamente fue incorporando una oposición general al modelo económico-social y a la política educativa del macrismo. Andrés Aguirre, profesor de Historia del Conurbano Bonaerense, considera que

la primera y más concreta reivindicación es la salarial, porque la inflación del año pasado y la de este año ya se comió el 40% de nuestros sueldos. Pero detrás

1 Ante la crisis en la educación pública, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) instaló un plantón permanente frente al Congreso Nacional durante treinta y tres meses. En la Carpa ayunaron más de mil maestros, y fue visitada por alumnos de 7 mil escuelas y diversas personalidades públicas. El apoyo de la sociedad se reflejaba en el lema “Hoy somos todos docentes”. En diciembre de 1999, la CTERA decidió desarmar la Carpa Blanca al aprobarse finalmente el establecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que otorgaba 660 millones de pesos para el aumento salarial.

de ello está el reclamo más general en defensa de la educación pública: con la crisis económica cada vez más niños van a las escuelas a comer y éstas terminan convirtiéndose en comedores populares y no en espacios educativos. No se construyen aulas y/o escuelas desde 2015. Asimismo, se pide que se inviertan más recursos en la educación pública, cosa que no se hace y por el contrario el Ministerio de Educación subejecuta las partidas de dinero y las destina a gastos corrientes del gobierno, entre otras irregularidades.

Con el devenir de los meses, los paros y las movilizaciones, la mayoría de las provincias otorgaron a sus docentes el aumento salarial, aunque bastante alejado de sus exigencias: en Jujuy se confirió el 10%, ocho provincias negociaron por debajo del 20%, nueve por encima de él y tan sólo cuatro alcanzaron un aumento mayor al 30%, con el caso extremo de San Luis que se elevó al 50%. Al mismo tiempo, los mecanismos para establecer dichos aumentos fueron variados y reflejan el juego político que se dio en torno al conflicto; mientras en algunas entidades se realizó el acuerdo paritario, en otras el incremento se estableció por decreto del gobernador (Mendoza, Tierra del Fuego, San Juan y la Ciudad de Buenos Aires) o a través de la conciliación obligatoria con gremios adeptos (Jujuy y Córdoba). No obstante, debido a que el reclamo tiene implicancias más profundas y de mediano plazo, la demanda por la PND –en tanto elemento regulatorio del salario– se mantiene como instrumento reivindicativo de la lucha docente.

Los sindicatos nacionales (CTERA, UDA, AMET, SADOP, CEA²) siguen sosteniendo que el aumento establecido en el acuerdo del 2016 marca un piso salarial y no su techo, por lo cual no reemplaza la instancia paritaria. Ésta además es necesaria para no agudizar las desigualdades interprovinciales:

La PND ha logrado mejoras significativas en el salario en todo el país y ha fortalecido las capacidades institucionales de cada uno de los miembros del sistema educativo (nación, provincias y sindicatos) para dar respuesta a los problemas de la educación argentina, y su desaparición traería consigo el debilitamiento de los sindicatos y de la educación pública en general, al recortar las incumbencias del Ministerio de Educación de la Nación en los distintos campos de la política educativa (Centro de Estudios del Trabajo y Desarrollo, 2017).

2 Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Unión Docentes Argentinos (UDA), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

La importancia estratégica de la Provincia de Buenos Aires –donde se concentran el 44% de los docentes del país– convierte sus acuerdos paritarios en el caso *testigo* a nivel nacional, al mismo tiempo que sus sindicatos docentes (de larga trayectoria combativa) ejercen una influencia importante en los gremios nacionales. La postura del gobierno oficialista de María Eugenia Vidal, que se tardó más de cinco meses en dar una oferta salarial que se acerque a las demandas docentes, hizo del conflicto en dicha entidad el más emblemático y resonante a nivel institucional.

El Frente Gremial Docente Bonaerense (FGDB), compuesto por la unión de seis sindicatos (SUTEBA, FEB, UDA, SADOP, AMET y UDOCBA³) exigía un incremento del 35% en un solo pago, por lo cual rechazó sistemáticamente las propuestas que el gobierno, argumentando falta de recursos, realizaba con exiguas modificaciones y siempre en cuotas.

La estrategia de la gobernadora se basó en el desgaste y el ataque a los docentes en un conflicto que decantó en 150 días de discusiones y 17 jornadas de paro. Vidal estigmatizó a los maestros mientras se esgrimía en la defensora de los alumnos, procurando desplazar el eje de la discusión a la calidad educativa, la capacitación y el ausentismo; “[. . .] la actitud es despectiva y disciplinadora, nos amenazaron con maestros sustitutos (los famosos voluntarios-carneros), todo el tiempo sosteniendo un doble discurso, planteando el diálogo y luego pegando” (Georgina Gabucci, integrante de SUTEBA). Esto, junto al bono extra por presentismo y la amenaza de un plan de recuperación de clases durante los recesos vacacionales, formó parte de un plan sistemático de amedrentamiento hacia los docentes que incluyó, además, un nivel importante de violencia simbólica a través de los medios de comunicación hegemónicos:

atacan a los líderes sindicales sin tomar en cuenta las reivindicaciones de las bases y ponen mucho énfasis en las consecuencias de las medidas de fuerza sobre los chicos (por ejemplo, la pérdida de clases), revalorizando la educación privada (Yamila Vega, docente rural de la Provincia).

La violencia física e institucional ejercida por las fuerzas de seguridad sobre docentes, alumnos y escuelas también se constituyó en un recurso privilegiado para desestabilizar la moral de la lucha a través de prácticas represivas, de hostigamiento e intervención en espacios institucionales. El episodio más em-

3 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Unión Docentes Argentinos (UDA), Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).

blemático fue la represión que sufrieron los maestros nucleados en la CTERA el domingo 9 de abril por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuando instalaban una “escuela itinerante” en la plaza frente al Congreso Nacional como forma pacífica de reclamo y concientización de la problemática docente. La indignación por este episodio, que dejó varios heridos y detenidos, se esparció por todo el país y produjo numerosas manifestaciones de repudio.

Si bien el movimiento social tuvo un carácter nacional –reflejado en la Marcha Federal Educativa del 21 de marzo donde participaron docentes de todo el país– la preeminencia de los gremios bonaerenses ha sido indiscutible. En este sentido, la dinámica del movimiento en Buenos Aires nos ayuda a entender la complejidad del proceso en todo el país. Allí, si bien los gremios docentes lograron superar sus diferencias y unirse en una lucha común, persistió entre los maestros cierta división:

Es un conflicto complejo, porque mediáticamente hay una andanada de cuestionamientos a la tarea docente y su rol, discurso que repiten los propios maestros que, a partir de la construcción de la otredad en los sindicalistas, ven como enemigo número uno a los sindicatos y no a la patronal [. . .] Una cosa son las grandes movilizaciones, la bronca ante cada fecha de cobro y otro son los discursos que giran dentro de las salas de maestros (Georgina Gabucci).

Así, están los docentes que apoyan al gobierno y los que se oponen a él –que pueden ser kirchneristas o de izquierda– principalmente militantes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Las divergencias al interior de SUTEDA, el gremio más importante en Buenos Aires, ilustran muy bien esta situación:

La actual conducción es la Lista Celeste (de Roberto Baradel) que está siendo fuertemente cuestionada por las bases, sobre todo en los distritos donde se conformó la oposición compuesta por múltiples agrupaciones que se nuclean en el Frente Multicolor. La reciente disputa electoral frenó la lucha docente en el último mes y la condicionó desde el principio porque las conducciones gremiales se negaron a tomar medidas de fuerza contundentes por miedo a que la oposición radicalice la lucha y les dispute la base (Andrés Aguirre).

Este conflicto interno que atravesó y condicionó la lucha, fue aprovechado por el gobierno que apoyó indirectamente al frente Multicolor (no kirchnerista) el cual, paradójicamente, reclamaba más dureza en la confrontación contra éste. La derrota de esta estrategia fue tal que, ante el triunfo de la lista Celeste y

la continuidad de Baradel como Secretario, el gobierno tuvo que realizar una oferta más acorde a las demandas.

Las sectorizaciones están, al mismo tiempo, atravesadas por las diferencias entre el ámbito estatal y el privado. Para Adriana Privato, vicedirectora de una institución privada del Conurbano Bonaerense,

el conflicto salarial se vive con mucha tensión, dado que en todas las escuelas privadas hubo clases desde el primer día, mientras que en las escuelas públicas no, porque los docentes estaban en paro. Y esto genera tensiones porque los mismos docentes que paran en el Estado son los que trabajan en la escuela privada.

Finalmente, en los primeros días de julio, el Frente de Unidad aceptó la propuesta del gobierno bonaerense de otorgar un aumento total del 27.4⁰%, con la incorporación de una cláusula gatillo de actualización automática por inflación y un monto no remunerativo en concepto de material didáctico. Tras el acuerdo, Baradel manifestó: “Cuando decíamos que había dinero teníamos razón. Si hubiera habido una decisión del gobierno en su momento se podría haber evitado un conflicto tan fuerte como el que tuvimos” (Página 12, 4 de julio 2017); mientras que la gobernadora declaró públicamente que “la paritaria no había sido el resultado de los paros sino que se logró dialogando y con los chicos en las aulas”.

El panorama se complejiza más con la situación de los docentes de Santa Cruz y Chaco, que no lograron de los gobiernos provinciales una oferta de aumento salarial cercana a sus demandas. Ubicada en las antípodas geográficas y socioeconómicas, Santa Cruz presenta el salario docente más alto del país, mientras que Chaco se encuentra entre los niveles más bajos. Al mismo tiempo, estas dos entidades son gobernadas por el kirchnerismo y cuentan con un gremio docente cuya línea política es más bien ambigua. En el caso de Santa Cruz, ADoSac (Asociación de Docentes de Santa Cruz) actualmente es liderado por una lista derivada del Partido Obrero pero que se mantiene cerca la Unión Cívica Radical (opositora al kirchnerismo) y es funcional al macrismo. Mientras que en Chaco, ATECH (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco) oscila entre el campo popular y una postura abiertamente de derecha. En este sentido, como ha sucedido en otras provincias de administración kirchnerista (Entre Ríos, por ejemplo) el eje del conflicto se pone en el gobierno provincial mientras que el nacional busca desligarse de la conflictividad:

El gobierno nacional necesita mostrar a una Santa Cruz que no paga los salarios, que tiene la salud y la educación destruida, para mostrarle al país lo que es el

kirchnerismo y que el bueno de la política y que puede hacer un país diferente es el macrismo. Muestran a Santa Cruz como si fuera la nueva Venezuela [...] Pero al mismo tiempo, nosotros vemos que el gobierno provincial está implementando el mismo ajuste de Macri, aún contando con recursos fiscales. El kirchnerismo y Massa, si bien posan como opositores, están de acuerdo en ponernos de rodilla y nosotros quedamos en el medio de su juego de antagonismos (Eduardo Manzione, miembro de “Docentes en marcha” del partido Izquierda Socialista).

El juego político que atraviesa el conflicto en Santa Cruz adquiere así nuevas formas; a diferencia de la Provincia de Buenos Aires, la disputa Cambiemos-Kirchnerismo se da a la inversa. Esto lleva a los sectores de izquierda a denunciar la incoherencia del gobierno provincial, que a nivel nacional se posiciona como defensor de los docentes mientras que internamente no logra solucionar el conflicto:

Hay una manipulación de los dos lados: el macrismo identifica la lucha docente con el kirchnerismo para demonizarlo, pero éste se apropia de esa lucha como una reivindicación partidaria, que en la práctica no lo es. Mientras tanto, los docentes santacruceños tratamos de superar esta falsa dicotomía que plantean los medios entre kirchnerismo y macrismo. Nosotros somos ajenos a esa disputa (Eduardo Manzione)

Apelando al vaciamiento económico de la provincia –a pesar de ser una de las entidades con mayor cantidad de recursos estratégicos, lo cual hace de su nivel de vida extremadamente costoso– el gobierno de Alicia Kirchner no ha avanzado demasiado en el acuerdo paritario con los docentes, extendiendo el conflicto hasta la segunda mitad del año. Esto, junto al retraso en el pago de los salarios, la persecución a los docentes que realizan el paro, la retención de aportes sindicales y la reducción del servicio de prestaciones médicas, han determinado un alto nivel de acatamiento a las medidas de fuerza, compuestas por paros indeterminados y movilizaciones.

La provincia de Chaco, en cambio, es una de las más pobres del país lo cual la hace depender mucho de los recursos destinados por el gobierno federal. La insuficiencia de éstos –tanto para el aumento de salarios como para los fondos de comedores escolares– generó que el conflicto se orientara hacia el poder ejecutivo nacional, y que ATECH y los otros gremios de la provincia se unieran tanto en el reclamo como en el plan de lucha.

El nuevo contexto político, económico y social planteado con el retorno de las políticas neoliberales desde fines del 2015, le da un carácter trascendente al

movimiento surgido a partir del conflicto docente. Éste ya no sólo condensa demandas sociales más amplias sino que se convierte en un actor político fundamental contra las reformas estructurales que pretende implantar el macrismo.

Estamos en una reedición de políticas ya vividas, donde se vuelve a plantear el achicamiento del Estado. Donde se demoniza la participación y la política. El conflicto estalló en el año de las elecciones de nuestro sindicato y eso no es casualidad, disciplinando a los maestros quieren disciplinar a toda la clase obrera [. . .] El macrismo hoy quiere una escuela pública contenedora de pobres que le dé herramientas para trabajos básicos, y una educación privada que forme a la dirigencia y a los CEO de empresas (Georgina Gabucci)

Junto al incremento de la desigualdad y la pobreza generadas por las medidas de ajuste, el ataque a la vida democrática se ha convertido en una constante, principalmente a través del embate a la política de derechos humanos (entre ellos, la posibilidad de otorgar una reducción de penas a los genocidas de la última dictadura militar) y la criminalización de la protesta social. El encarcelamiento de dirigentes sociales –como la líder indígena Milagros Salas–, la desaparición de personas –el caso del joven Santiago Maldonado–, la persecución ideológica y la represión directa a los diferentes grupos movilizados (obreros, comunidades indígenas y estudiantes) es el *modus operandi* de un gobierno que, con el apoyo de un sistema judicial y una maquinaria mediática adeptos, busca eliminar la disidencia y la participación política activa.

La educación es el escenario donde se libran las batallas más importantes en la pugna política de la Argentina de hoy: al mismo tiempo que se convierte en la arena privilegiada para la criminalización de la protesta por parte del gobierno, es el laboratorio donde surgen las respuestas más contundentes a las políticas entreguistas del macrismo, que apuntan a dismantelar un Estado de bienestar social que empoderó a los sectores populares (Marcela López Perdomo, profesora de Historia del Conurbano Bonaerense).

Para el antropólogo argentino Alejandro Grimson “en el conflicto docente [. . .] no está en juego sólo la educación, sino una relación de fuerzas político-culturales. Es el sitio exacto donde se tramita el proceso hegemónico en esta coyuntura” (Grimson, 2017: 1). En este sentido, la inminencia de un proceso electoral a nivel legislativo le dio al movimiento un carácter político fundamental en tanto espacio de canalización y reproducción del descontento social. Y para el

gobierno significó “la tentativa de hacer del conflicto salarial con los docentes la confrontación que blinde, relance y potencie su mandato” (Semán, 2017:1).

Al mismo tiempo, el conflicto cobra fuerza ante la intención del gobierno nacional de realizar una reforma educativa a largo plazo, lo cual constituye para los maestros un ataque deliberado a la educación pública. Ellos han visto en el cierre de programas educativos, la reducción del presupuesto para nivel superior, universitario e investigación, y la ofensiva discursiva contra la escuela pública –con un presidente que declara que la inequidad educativa pasa por aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública– los pasos previos a dicha transformación.

Somos un país con una tradición en escuelas públicas, y hoy es evidente que están en riesgo. Siempre se escucha que la educación estatal es un problema, cuando en realidad es el problema que tienen para mercantilizar o privatizar la escuela (Carlos Cuevas, docente de la provincia de Chaco).

La reforma educativa, denominada Plan Maestr@, se centra en un mejoramiento de la calidad educativa a través de la extensión de la escolarización obligatoria, la evaluación constante y la mejora de la carrera docente. Para Carlos Andújar y Miguel Andrés Brenner este Plan es, en realidad, una reforma laboral que, bajo los criterios de eficiencia, competitividad y costos, propone transformaciones administrativas que terminarán por precarizar y flexibilizar el trabajo docente, al mismo tiempo que eliminaría implícitamente la PND al suplantar la Ley de Financiamiento Educativo. La concepción de la educación subordinada a la formación de recursos humanos para el mercado subyace a la propuesta, dejando a la escuela pública relegada para los sectores más desfavorecidos.

La educación está entre dos posiciones contrapuestas: o se educa para responder a las necesidades de un mercado que necesita un ser óptimo que no se queje y que trabaje, o se educa para que esa persona sea libre y pensante, que pueda aportar a la sociedad con lo que él desee (Ivón Bacarreza, maestra y bibliotecaria de la Ciudad de Buenos Aires).

Así, el conflicto docente y el movimiento social que generó, convergen en múltiples luchas libradas en el orden material y simbólico, en un contexto donde se las pretende atomizar y polarizar.

Lo que está en juego en nuestro país es justamente la disputa por los sentidos, una batalla ideológica ante una mayoría que entendemos que el Estado tiene que seguir teniendo preponderancia sobre los asuntos públicos [. . .] El problema es de clase: los y las docentes vamos a seguir defendiendo la educación pública en contra de la clase dominante que quiere imponer un proyecto privatizador y mercantilista de la educación (Andrés Aguirre).

Por ello, una parte de la sociedad argentina ha superado el cerco mediático y ha apoyado contundentemente a los maestros en su lucha. Para María Mercado, profesora de Comunicación de la provincia de Entre Ríos, es necesario “generar una consciencia de que realmente la educación es lo más importante, y que no estamos peleando solamente por nosotros sino también por nuestros estudiantes”.

Para el antropólogo Pablo Semán, la importancia del conflicto docente es intrínseca a la apuesta política específica contenida en la actividad docente misma: “la profesión educativa construye sobre las vocaciones una forma de voluntad [. . .] y contiene un programa específico de actividad que implica promover cambios y atacar [. . .] inercias en las relaciones sociales”. Éste es, sin duda, el motor de un movimiento que busca reivindicar realmente la labor docente.

Docentes entrevistados

Aguirre, Andrés (Provincia de Buenos Aires)
 Bacarreza, Ivón (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
 Cuevas, Carlos (Chaco)
 Gabucci, Georgina (Provincia de Buenos Aires)
 López Perdomo, Marcela (Provincia de Buenos Aires)
 Luque, Emilio (Provincia de Buenos Aires)
 Majluff, Marcela (Córdoba)
 Manzione, Eduardo (Santa Cruz)
 Mercado, María (Entre Ríos)
 Privato, Adriana (Provincia de Buenos Aires)
 Vega, Yamila (Provincia de Buenos Aires)

BIBLIOGRAFÍA

Andújar, Carlos, y Miguel Andrés Brenner (2017). “El Plan Maestro”. *Página 12*, 11 de junio de 2017. Recuperado de: <http://www.pagina12.com.ar/43301-el-plan-maestro>.

- Birgin, A., Carli, S., Morgade, G., Perazza, R. (2017). "Un Plan Maestr@ sin maestr@s". *Página 12*, 20 de junio de 2017. Recuperado de: <http://www.pagina12.com.ar/45224-un-plan-maestr-sin-maestr-s>.
- Centro de Estudios del Trabajo y Desarrollo (2017). *La Paritaria Nacional Docente: una institución amenazada*. Documento de trabajo, San Martín: Noticias UNSAM.
- Grimson, Alejandro (2017). "Ajuste político y batalla cultural". *Anfibia*. Recuperado de: <http://www.revistaanfibia.com/ensayo/ajustepoliticoybatallacultural/>.
- Página 12 (2017). "El acuerdo que Vidal demoró hasta la campaña". 4 de julio de 2017. Recuperado de: <http://www.pagina12.com.ar/48053-el-acuerdo-que-vidal-demoro-hasta-la-campana>.
- Semán, Pablo (2017). "Soñar con Thatcher, despertar con Galtieri". *Anfibia*. Recuperado de: www.revistaanfibia.com/ensayo/sonar-con-thatcher-despertar-con-galtieri/.
- Verbitsky, Horacio (2017). "Una lección que no aprenden". *Página 12*, 21 de mayo de 2017: Recuperado de: www.pagina12.com.ar/39143-una-leccion-que-no-aprenden.